

Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas*

JULIO LABASTIDA M. DEL CAMPO

En estas páginas me propongo someter a discusión algunas ideas más o menos generalizadas, sobre el llamado modelo político mexicano relacionándolas con algunos de los aspectos de la actual coyuntura que me parecen más relevantes.

Voy a referirme principalmente a aquella concepción que considera que el rasgo más importante del sistema político mexicano, es la capacidad del Estado para imponer su voluntad sobre cualquier clase o grupo social incluyendo a la burguesía, siempre que no atente contra las bases mismas del capitalismo. Esta fuerza del Estado provendría de su carácter semicorporativo, de la combinación de elementos ideológicos y políticos concretos que configuran lo que se ha designado como nacional-populismo mexicano y de la gran concentración de poder y prestigio que dentro de este esquema tiene el titular del ejecutivo; a lo anterior habría que añadir el peso del sector público en la economía.

Por otra parte, la génesis histórica del Estado mexicano: la irrupción de las masas en la vida política en la Revolución de 1910 y su incorporación al Estado mediante una organización corporativa, determinarían su vocación reformista.

Debido a todas estas características del sistema político, las reformas sociales dependerían fundamentalmente de la voluntad estatal de vencer las posibles resistencias; voluntad que, para muchos, estaría encarnada en el presidente en turno.

En el origen de la concepción del proceso político mexicano, está el contemplarlo desde la perspectiva de que los dos rasgos más importantes, a partir de 1917, serían la progresiva consolidación del Estado fuerte y del

* Trabajo presentado en el Primer Congreso de la Sociedad Mexicana de Sociología, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, del 14 al 18 de enero de 1974.

presidencialismo. Tal interpretación buscaría su apoyo histórico en la flexibilidad que el sistema político ha demostrado al transformarse manteniendo la continuidad institucional. Por otra parte, el éxito que tuvo el Estado al aplastar fuerzas significativas que lo cuestionaban desde afuera en distintos momentos históricos —levantamientos de caudillos militares, intentos de resistencia de la clase latifundista porfiriana, rebeliones clericales, enfrentamiento con las compañías petroleras extranjeras, movimiento ferrocarrilero del 59, movimiento estudiantil del 68— ha contribuido a alimentar la imagen de un Estado capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente a su derecha o a su izquierda.

Creo que un balance somero de la actual coyuntura —particularmente en relación con lo que ha sucedido con el programa de reformas del gobierno de Luis Echeverría—, contribuiría a darnos algunos elementos acerca de las bases reales en las cuales se sustenta la estructura de poder, sobre todo porque la actual coyuntura es particularmente rica en contradicciones. Entre los que sostienen la concepción del Estado fuerte y de vocación reformista se considera que en la presente coyuntura el propio desarrollo del capitalismo de México plantea la necesidad de realizar reformas políticas y reorientar la estrategia de desarrollo. El mismo proceso de desarrollo económico, señalan, ha generado nuevas fuerzas sociales que ahora exigirían su inclusión o una participación más activa en la vida política. Por otra parte, el paso a una fase más avanzada del capitalismo implicaría una ampliación sustancial del mercado interno. Por lo tanto, democratización política y redistribución del ingreso deberían ser objetivos a los que tendiera el programa gubernamental, programa que contaría para su viabilidad con el hecho de responder a las condiciones objetivas: políticas y económicas, de la presente coyuntura.

LA “APERTURA DEMOCRÁTICA” Y EL PROGRAMA DE REFORMAS

El programa de gobierno de Luis Echeverría sorprendió a amplios sectores de la opinión pública —particularmente a los círculos democráticos y de izquierda— y a especialistas que pensaban que la tendencia que apuntaba a reafirmar los rasgos autoritarios, represivos y antipopulares del régimen era ya incontenible. Por otra parte, para algunos sectores de la izquierda todos los cambios se reducirían a una oratoria demagógica sin ningún contenido real; demagogia que serviría para cubrir la continuidad esencial con la política del régimen anterior.

Sin embargo, tanto a nivel de proyecto de gobierno como en su aplicación concreta, el gobierno de Echeverría ha llevado a puntos de ruptura

importantes en relación a las tendencias que se habían implantado en las dos décadas anteriores y particularmente en el régimen pasado. A nivel de proyecto de gobierno las rupturas más significativas estarían dadas, en el terreno económico, por el propósito de reorientar el modelo de desarrollo hacia el exterior —reorientación que incluye la modernización del aparato productivo, la modificación de la política agraria y de las relaciones entre la agricultura y la industria—, reivindicación de un papel más dinámico del Estado en el proceso de desarrollo, y la aplicación de medidas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. A nivel político, el programa está claramente orientado a fortalecer y a ampliar las bases sociales del Estado, particularmente entre las clases populares. Este objetivo se ha tratado de implementar, en parte, mediante un intento de volver a las fuentes cardenistas del sistema político y renovar así la legitimidad. De ahí el resurgimiento de un estilo populista —y, por otra parte, el intento de enfrentar los cambios políticos que ha experimentado el país mediante una serie de medidas democratizantes que se han denominado como “la apertura”.

“La apertura” se ha traducido en la práctica en una mayor libertad de expresión a nivel de la prensa¹ y de la crítica social en general. Ha permitido también que los sectores democratizantes y la izquierda tengan mayores posibilidades de influir en la opinión pública. Además, la política hacia el sector estudiantil ha sufrido un cambio importante: el gobierno no sólo ha demostrado una neutralidad permisiva, sino incluso ha dado su apoyo a autoridades universitarias que garantizan el pluralismo ideológico y que representan una solución no autoritaria a la actual crisis universitaria. También ha proporcionado mejores condiciones que los gobiernos anteriores para la organización de los sectores medios radicalizados y de los obreros que luchan por la independencia sindical. En líneas generales, se trata de flexibilizar las reglas del juego y establecer canales paralelos² para que los sectores sociales no integrados en la organización corporativa o que intentan escaparse de ella, puedan expresarse y mantengan contactos institucionalizados con el Estado. También es importante destacar que contrariando la tendencia que predominó durante el gobierno de Díaz Ordaz, se ha preferido la negociación y la cooptación a la represión, en el trato con los grupos disidentes; además, se ha dado a esta última un carácter más selectivo y localizado.

Esta “apertura” hacia los sectores sociales no incorporados o disidentes ha ido acompañada de intentos para renovar el viejo aparato de control. En este sentido hay que mencionar los esfuerzos de democratización del PRI, permitiendo una mayor participación de las bases y atenuando los mecanismos verticales de control. También hay que mencionar los ataques provenientes de altas esferas gubernamentales y partidarias a la burocracia sin-

dical obrera, a los cacicazgos y a los elementos antidemocráticos en la organización ejidal; ataques que la mayoría de las veces se han quedado a nivel verbal pero que en otras ocasiones se han manifestado en una neutralidad permisiva, como ha sucedido en ciertos momentos respecto a la lucha de grupos obreros independientes o de apoyo directo a fuerzas que cuestionan la vieja estructura de poder, como es el caso de algunos movimientos en contra del caciquismo. Es importante mencionar como un paso más en la organización corporativa, la creación de las comisiones tripartitas, a nivel de todo el país, para la aplicación de la política económica, que están integradas por representantes de los empresarios, de los sindicatos oficiales y de los funcionarios estatales.

Hay que hacer mención especial del cambio de política hacia los campesinos. En lo que se refiere a sus luchas se ha permitido una manifestación más clara de los conflictos latentes y se ha tolerado y, a juicio de los grupos afectados, estimulado la denuncia de situaciones irregulares en la propiedad rural. El clímax de esta política se dio en 1972, con la ola de invasiones de tierras, la multiplicación de marchas campesinas y la radicalización del lenguaje de los líderes y autoridades agrarias oficiales; proceso que culmina con la ocupación de la CNC por los propios campesinos afiliados a esta organización.

En lo que se refiere a la apertura tan equivocados estaban los que pensaron que los cambios serían puramente oratorios, como aquellos sectores de izquierda que creyeron que la apertura implicaba la tolerancia a cualquier intento de organización y movilización independiente de las clases trabajadoras, así como la vigencia de garantías para cualquier forma de lucha, consagradas por la ley. Pensaron nada menos que se trataba de la vigencia del proyecto democrático contenido en la Constitución de 1917. La "apertura" encuentra sus límites no sólo frente a una estructura de poder que la resiste, sino en la misma lógica de aquello que la fracción reformista ha entendido por democratización.

Dado que la "apertura" busca el fortalecimiento del Estado a través de la ampliación de su base social y de la flexibilización de los canales para manejar los conflictos sociales, no es sorprendente que responda en forma represiva a la acción de los grupos guerrilleros, sino incluso a la acción de aquellos grupos u organizaciones que sin recurrir a la violencia tratan de someter a un continuo desgaste a la estructura de mediación, mediante un ataque frontal a las instituciones que la sostienen.

¿CUÁL ES LA BASE SOCIAL DEL REFORMISMO?

Desde la perspectiva de algunos sectores de la izquierda la “apertura” estaría apoyada por las capas lúcidas de la burguesía, por el sector modernizador que comprendería la necesidad de renovar las formas de control sobre las masas, para que el Estado pudiera realizar la modernización del sistema productivo, aun en contra de las fracciones atrasadas de la misma burguesía. La “apertura” sería la cara política del avance del capitalismo a una fase superior. Es posible que la fracción monopólica de la burguesía mexicana y los grandes consorcios internacionales estén dispuestos, llegado el caso, a apoyar la modernización del sistema productivo —que no implica necesariamente políticas de redistribución del ingreso— y su reorientación hacia el exterior, como lo hicieron en el Brasil. Sin embargo, en México no se han dado las condiciones políticas para que esa reorientación se haga en forma rápida y efectiva. En parte, porque los sectores más atrasados de la burguesía son los que tienen ligas más estrechas con el aparato político, pero sobre todo, porque hay un desacuerdo fundamental entre la burguesía en su conjunto³ y los consorcios internacionales por un lado y la facción reformista del grupo gobernante, por el otro. Este desacuerdo se manifiesta sobre todo en las relaciones del gobierno con las clases populares y los núcleos radicalizados de los sectores medios, o sea respecto a la “apertura”, pero también por lo que se refiere a la posición del gobierno frente al capital extranjero y dentro del juego político internacional. Particularmente en lo que se refiere al acercamiento a aquellos países latinoamericanos (Perú, Panamá, Argentina, Ecuador, Cuba, Chile, durante el gobierno de la UP) que en el marco de la OEA o fuera de ella cuestionan el sistema interamericano de relaciones. Un punto particularmente irritante ha sido la política hacia Chile que a partir del golpe de Estado revivió los mejores momentos de la política exterior del cardenismo.

En el contexto anterior hay que situar las declaraciones del embajador de Estados Unidos, el año pasado, en las que pedía al gobierno que esclareciera las nuevas reglas del juego en relación al capital extranjero. Por otro lado, la burguesía mexicana ha acusado al gobierno de amenazar la continuidad del proceso de desarrollo, al crear un clima de inseguridad con sus proyectos de mayor intervención estatal en la economía, particularmente de reformas a la política fiscal y de colectivización del ejido. Además, la burguesía ha acusado al gobierno no sólo de tolerar, sino de instigar el odio de clases, la agitación y el terrorismo con su política populista y su tolerancia hacia los grupos radicales en las universidades y en las organizaciones políticas. La postura del gobierno de Luis Echeverría frente a la junta militar chilena fue utilizada como un argumento más de apoyo a la tesis

del procomunismo gubernamental. Una serie de chistes y rumores al respecto culminaron con la declaración del dirigente del PAN acerca del "allendismo" del presidente, haciendo referencia no sólo a la política exterior, sino principalmente a la interna.

Otro punto importante del conflicto entre la burguesía y el grupo gobernante, es la política agraria, no obstante que el gobierno ha dado un fuerte apoyo al desarrollo del capitalismo en el campo. Este apoyo se ha manifestado en la expedición de un número impresionante de certificados de inafectabilidad de la pequeña propiedad, la creación de certificados agrícolas ganaderos y las reformas al código agrario, que permiten el arrendamiento de la parcela ejidal. Sin embargo, la Ley de Aguas al acabar con el subsidio estatal a la clase empresarial agrícola⁴ y el proyecto de organizar ejidos colectivos han encontrado fuertes resistencias no sólo a nivel de la burguesía rural, sino también entre algunos de los más importantes líderes de la gran burguesía urbana. Por otra parte la expropiación de grandes latifundios de miembros prominentes de la burguesía y de la "familia revolucionaria" ha sido un factor de alarma. Finalmente, un elemento adicional de irritación ha sido el incremento de las actividades de la guerrilla urbana que ha atacado a la burguesía en algunos de sus miembros más importantes.

La respuesta de la burguesía a los intentos de llevar las reformas a la práctica ha sido severa,⁵ como sucedió en el enfrentamiento con López Mateos —de acuerdo a declaraciones de líderes empresariales— se han retraído las inversiones y han salido capitales. Por otra parte, han subido de tono las amenazas y acusaciones al régimen, a la vez que han organizado una campaña bien orquestada de desprestigio a la figura presidencial.

Ante la ofensiva de la burguesía el gobierno ha retrocedido en muchos terrenos: ha retirado el apoyo a algunos sectores universitarios progresistas, ha rectificado la política obrera acercándose a la vieja burocracia sindical; en cuanto a sus relaciones con los campesinos ha disciplinado a los líderes agrarios oficiales más radicalizados y reprimido a los independientes y ha presionado a los campesinos mediante negociación o amenazas para que transen, o incluso cedan, en la lucha por sus reivindicaciones. Con respecto a la política agraria, la nueva Ley de Aguas no ha podido ser hasta ahora aplicada.⁶

En el terreno económico el gobierno siguió la línea de aplicar reformas, siempre que no afectaran a la burguesía, o negociándolas de tal manera que perdieran eficacia. De esta manera, la tan anunciada reforma fiscal se redujo a reajustes menores. La política del gobierno de subsidiar a la industria a través de bajos precios en los servicios y en los energéticos, sólo experimentó reajustes en el marco de una coyuntura económica crítica y bajo la mirada fiscalizadora de los empresarios. La reorientación del sistema

productivo hacia el exterior, de la que se había anunciado que implicaría cambios radicales en la política industrial, arancelaria y fiscal, para desalentar a las industrias ineficientes, se ha tratado de obtener abriendo más el país al capital extranjero y estableciendo nuevos mecanismos protectores para las industrias establecidas que exporten, mientras se sigue protegiendo al sector atrasado e ineficiente.

Las grietas en la cúspide del sistema van más allá de la oposición burguesía-grupo gobernante. También hay conflictos en el seno de este grupo: las facciones que propugnaban una salida autoritaria y un mayor acercamiento con la burguesía, mantienen posiciones a todos los niveles del aparato estatal; son fuertes en las estructuras locales de poder, controlan los sindicatos oficiales y, lo que es más peligroso, parecen mantener sólidas posiciones en el aparato represivo (policía y ejército). Sobre este último aspecto hay razones para creer que el Ejecutivo no mantiene bajo su control al aparato represivo en todos sus niveles. De esta manera, si el grupo gobernante ha entrado en fuertes conflictos con la burguesía, también ha encontrado poderosas resistencias dentro del propio aparato político. Las reformas de los sindicatos se han tropezado con la oposición decidida y exitosa de la burocracia sindical,⁷ mientras que los caciques y comisarios ejidales organizan la resistencia de los campesinos contra la regularización de las tierras y la introducción del ejido colectivo.⁸ Por otra parte, en el PRI, la nueva dirección compuesta por intelectuales reformistas parece haber sido neutralizada por un equilibrio interno de fuerzas que no ha logrado romper.

A fines de 1973, las relaciones entre la burguesía y el grupo gobernante parecieron llegar a un punto crítico; mientras tanto la ultraderecha ha dado muestras de avanzar en sus posiciones y ha desplegado una gran actividad. Los secuestros y una extensa campaña de terror anticomunista, a base de rumores, han llevado en algunas ciudades como Monterrey y Guadalajara a una situación claramente favorable al fascismo.

Como respuesta al incremento de la guerrilla urbana en estas dos últimas ciudades, la burguesía ha llevado a plantearse organizar sus propios cuerpos armados, como con anterioridad sucedió en Sinaloa, ante el incremento de la agitación en el campo. En Guadalajara el desprestigio del gobierno federal y la campaña antipresidencial alcanza hasta a las organizaciones del PRI y del gobierno estatal, mientras que la burguesía local ha hecho llamados públicos al jefe de la zona militar —hecho inusitado— para que les otorgue seguridades.

¿Cuál es entonces la base social del proyecto de reforma? Los reformistas ocupan posiciones dentro del aparato estatal y han encontrado adhesiones fuera de él, entre reducidos círculos de los sectores medios, particularmente entre los intelectuales, pero ni siquiera han logrado consolidar posiciones

entre los sectores estudiantiles que miran las reformas con desconfianza. Sin el control directo del grueso de la clase obrera —control que está en manos de la burocracia sindical conservadora— y sin haber logrado un acuerdo con los sectores obreros independientes, sólo quedarían las organizaciones campesinas —ligadas más directamente al presidente— y el ejército como posibles puntos de apoyo para el grupo gobernante reformista.⁹

Todo parece indicar que ni la institución del presidencialismo, ni las características de la organización del aparato político, han podido dar un punto de apoyo firme a las reformas. Entonces los resortes de la acción política hay que buscarlos en otra parte. El programa de reformas no ha obtenido una base social suficientemente fuerte, en cuanto ha desafiado al pilar más sólido en que se sustenta la actual estructura de poder en México; la burguesía asociada a los grandes consorcios internacionales, asociación reforzada por las tendencias del capitalismo en la presente etapa. Además, la burguesía cuenta con el apoyo actual o potencial de los beneficiarios directos de la vieja estructura del aparato estatal partidario y de las organizaciones populares. De la misma manera, las reformas atacan a la estructura de mediación apoyada en el medio rural, en los cacicazgos y en la corrupción de la organización ejidal, por lo que la resistencia al reformismo no sólo se localiza en la cúspide y en los niveles medios del aparato político, sino que tiene raíces muy profundas en las bases mismas del sistema.

Por otra parte, las características del proceso de desarrollo no favorecen una integración rápida de sectores amplios de la población, al nivel de la producción y del consumo.

En efecto, dado el carácter excluyente del tipo de desarrollo seguido, basado fundamentalmente en la producción de bienes de consumo dirigidos a reducidos sectores de la población con ingresos altos, la política económica tiende a propiciar un crecimiento en profundidad más que en extensión del mercado interno. Ampliar sustancialmente el mercado interno implicaría reajustes radicales en la política económica que, aparte de encontrar resistencias de orden político, atentaría contra el proceso de acumulación rápida de capital que es también una exigencia del modelo de desarrollo elegido. De ahí que se recurra a la alternativa de buscar salidas al exterior, más que a aplicar políticas redistributivas del ingreso orientadas a una ampliación rápida y sustancial del mercado interno. Por otra parte, el dinamismo del proceso no ha sido suficiente para contrarrestar la permanencia de un considerable excedente de fuerza de trabajo.

LA ENCRUCIJADA

Creo que ahora podemos replantearnos algunas de las hipótesis expuestas al principio, acerca del modelo político mexicano, en relación a la presente coyuntura. Ni la concepción del presidencialismo y del Estado fuerte de vocación reformista, así como tampoco la tesis de que existen condiciones objetivas para un programa de reformas que integran a sectores significativos de la población en el sistema político y en los frutos del desarrollo, con lo que se aceleraría la expansión del capitalismo, parecen tener bases sólidas de sustentación en lo que se refiere a la presente coyuntura. Me parece que en la base de la interpretación a la que nos estamos refiriendo hay dos aspectos por considerar: el nivel de análisis y la periodización histórica, o sea el problema de las rupturas estructurales.

En lo que respecta al problema del nivel de análisis, el estudio del aparato de dominación con sus características específicas (organización corporativa o democracia parlamentaria, equilibrio de poderes o presidencialismo, estilo político y formas ideológicas, etc.), si no está además situado a un nivel más estructural, es decir, a nivel de su contenido de clase, tiene un carácter formal. La sola descripción de un mecanismo complejo no responde a la pregunta de qué fuerzas lo impulsan y hacia dónde, o sea, que si bien nos ayuda a saber con qué instrumentos cuenta quien llegue a controlar el aparato estatal, no nos permite conocer quién de hecho lo controla. Nos informa de los canales institucionalizados en que se expresa la lucha de clases, pero no nos dice nada acerca de cuál es el bloque en el poder. De esta manera los estudios que hagamos centrados *exclusivamente* a nivel de las instituciones y de los mecanismos del aparato estatal tienen validez en la medida en que no pretendamos sacar conclusiones generales a nivel de las perspectivas de la lucha de clases, en una coyuntura específica.

El problema anterior está muy ligado al de la periodización, o sea a las rupturas estructurales dentro de un proceso, que determinan el marco histórico que da sentido a la acción de las clases, grupos y categorías sociales. Estas rupturas estructurales las vamos a encontrar en el nivel de los cambios que se dan en el sistema capitalista a nivel mundial e interno, así como en las transformaciones en la estructura de clases y su expresión en la correlación interna de fuerzas y su relación con el equilibrio político internacional, particularmente en el caso de México, en lo que respecta a sus relaciones con los Estados Unidos.

Fernando H. Cardoso se ha referido a Brasil y México¹⁰ como dos casos en que, a través de distintos caminos, se ha llegado esencialmente al mismo fin: poner las bases políticas para un desarrollo acelerado del capitalismo industrial, en el marco de una mayor integración con las economías cen-

trales. Estas últimas trasladarían parte de su aparato industrial a ciertos países periféricos mediante una estrecha asociación de los consorcios internacionales con los sectores más modernos de la burguesía y del Estado. La consolidación de este modelo de desarrollo “asociado” implicaría la liquidación de los rasgos populistas y de las tendencias nacionalistas que buscaban un desarrollo “autónomo”, tal como se dieron en los gobiernos populistas del Brasil antes del golpe de 1964 y en México en el periodo de Cárdenas. Me parece que Cardoso tiene razón en asimilar los dos procesos en el terreno de la estrategia de desarrollo que se ha seguido en los dos países; sin embargo, habría que señalar diferencias en los dos procesos: en Brasil, el cambio en la estrategia de desarrollo culminó con el desmantelamiento del esquema de incorporación de las clases populares al Estado y en la eliminación de la vida política de las tendencias populistas y nacionalistas. De esta manera, los cambios en la estrategia de desarrollo se dieron en el marco de una ruptura institucional. En México, en cambio, se siguió el camino que Lázaro Cárdenas, en sus *Memorias*, llama la “contrarrevolución pacífica”. Sin que se dieran rupturas institucionales se trató de aprovechar las organizaciones creadas para la incorporación de las masas, poniéndolas al servicio de una estrategia de desarrollo que prescindía del proyecto político cardenista. Dicho proyecto había tenido como objetivos: el incremento gradual del peso del Estado y los “intereses nacionales” en el proceso de desarrollo y buscaba consolidar la alianza de los gobiernos post-revolucionarios con las clases populares a través de una política paternalista, pero que contenía reformas efectivas tanto en la política agraria como en la obrera. Estas reformas buscaban promover un fortalecimiento de las clases trabajadoras y un incremento de sus niveles de vida que las llevara a tener un mayor peso en el juego político y en las decisiones con respecto a los objetivos del desarrollo. A partir de Ávila Camacho el populismo y el nacionalismo mexicano cambiaron su contenido real; se dio una ruptura significativa en el modelo político a pesar de la continuidad que se mantuvo en ciertos elementos institucionales. *A nivel de proyecto social*, se pasó de un modelo de desarrollo de capitalismo “autónomo” e integrador, que se había traducido en algunas medidas concretas de importancia, a un modelo de desarrollo asociado y excluyente en el que el nacionalismo y el populismo pasaron a servir exclusivamente como elementos de control desmovilizadores de las masas, independientemente de la mejoría en los niveles de vida de algunos sectores claves de las clases populares.

Si bien el proyecto de reformas del actual gobierno no cuestiona en modo alguno la vigencia del modelo de desarrollo “asociado”, sí ha roto en algunos aspectos importantes con el acuerdo tácito existente, desde hace treinta años, en la cúspide del poder económico y político, en torno al clima nece-

sario para la continuación del proceso de acumulación de capital. Existe la suficiente distancia entre la burguesía y el actual grupo gobernante para que una fracción de este último pueda plantearse un proyecto que en algunos aspectos centrales no corresponde a lo que aquélla busca en la etapa presente. *La función de mediación y la relativa autonomía del grupo gobernante, cuyo contenido real varía de acuerdo a la correlación de fuerzas, ha sido un elemento clave en el sistema desde 1917; pero no hay duda que si la función de mediación se ha mantenido, el grado real de autonomía del grupo gobernante frente a la burguesía ha disminuido considerablemente a partir de los años cuarentas.*

El intento de revivir algunos aspectos del cardenismo, muchas veces sólo a nivel de la imagen del régimen, se da precisamente cuando la burguesía no sólo exige dejar enterrado ese pasado, sino cuando se siente lo suficientemente fuerte para exigir una participación más directa en los asuntos del Estado, el retorno al control de los sectores de la economía que este último conserva, mayores garantías para el desarrollo del capitalismo en el campo, una imagen del país que no ponga en peligro su proceso de integración con los consorcios internacionales. Finalmente, en relación al incremento de las luchas populares y la agitación social la burguesía exige una respuesta enérgica del gobierno, mediante la utilización de la fuerza y la liquidación de lo que, a su juicio, son las fuentes de la agitación: las organizaciones de izquierda; la actual estructura de las universidades, los círculos intelectuales críticos, los sectores de la iglesia progresista, los políticos populistas y los tecnócratas que sueñan con alguna forma de capitalismo de Estado. En otras palabras, la burguesía exige liquidar los restos de nacionalismo y de populismo que le quedan al sistema y cerrar el paso a las nuevas fuerzas populares.

Entre el fortalecimiento creciente de la burguesía y de los consorcios transnacionales y la emergencia de nuevas fuerzas, las tensiones sobre el sistema se acumulan. Debilitado internamente y atacado por la burguesía, el grupo gobernante se encuentra encerrado en un círculo que no ha podido romper recurriendo a la movilización popular. El grupo gobernante teme, con razón, que recurrir a esta alternativa en la presente coyuntura podría llevarlo a perder el control de la situación. En efecto, para lograr un apoyo popular efectivo el gobierno tendrá que recurrir a reajustes radicales y rápidos en el propio aparato político y sindical y en el ejército, limpiándolos de los representantes de la burguesía y de la facción conservadora del grupo gobernante al mismo tiempo que aplicar reformas que le permitieran obtener la movilización y el apoyo de las clases populares.¹¹ Estos reajustes provocarían una respuesta inmediata de la burguesía y probablemente también dentro del propio aparato estatal. En cambio, el camino que parece haber

elegido el grupo gobernante es el de detener las reformas en el momento en que hay una respuesta enérgica en su contra y esperar una coyuntura favorable, preparada por arduas negociaciones, o dar un golpe de sorpresa y negociar moderando los efectos de la reforma. Este camino ha llevado a una política incoherente e ineficaz, a la vez que propicia la inestabilidad política. En este contexto la impaciencia que está manifestando la burguesía es un elemento importante a considerar.

Por otra parte, podrían esperarse cambios significativos en el sistema político que llevaran más allá del proyecto de reformas del gobierno de Echeverría, la democratización del país y el fortalecimiento de las posiciones de izquierda si estuviéramos realmente en un momento de avance y consolidación de las luchas populares, como sostienen algunos sectores de izquierda. El incremento del descontento, la agitación y del conflicto social no aseguran por sí mismos la consolidación de conquistas populares, como se ha visto en la presente coyuntura. Esta consolidación depende, en gran medida, de la capacidad de respuesta de las fuerzas que se le oponen, en este caso, la trinidad: burguesía-burocracia político-militar conservadora-imperialismo. En la presente coyuntura esta capacidad de respuesta parece poder rebasar en mucho la iniciativa de la izquierda e incluso de los sectores reformistas, estén o no incrustados en el aparato estatal.

¿Podemos concluir que el sistema está entrando en una crisis profunda? Podríamos inclinarnos a pensarlo así, dado el aumento de las tensiones internas (particularmente el deterioro de las relaciones entre la burguesía y el grupo gobernante, con el trasfondo del incremento de las actividades de la guerrilla y de los grupos de ultraderecha), en el contexto de la evolución reciente de la situación política latinoamericana —golpes militares en Uruguay y Chile, rápido deterioro político en Argentina— que han mostrado claramente la hostilidad norteamericana y la intransigencia de las burguesías latinoamericanas ante cualquier intento de reformas que vaya acompañado, incite o siquiera tolere cualquier forma de movilización popular. Sin embargo, pensamos que en el caso de México no hay indicios de que a corto plazo, el sistema pierda la fuerza y la flexibilidad suficientes para resolver los conflictos sin rupturas institucionales. En primer lugar, ni los grupos guerrilleros ni los de la ultraderecha, enraizados en algunos sectores medios, representan por sí solos ningún desafío serio al sistema. Tanto unos como otros sólo podrían actuar como detonadores si las fuerzas e intereses que hasta ahora tienen la iniciativa —la burguesía, los consorcios transnacionales, las facciones de grupo gobernante, incluyendo al ejército— estuvieran decididas a cruzar el Rubicón. Este no parece ser el caso. La fracción reformista del grupo gobernante, aunque ha mostrado mayor resistencia que su homóloga en el periodo de López Mateos, también se ha ca-

racterizado por un gran pragmatismo. Por otra parte, la burguesía no parece dispuesta, hasta ahora, a jugar, en serio, la carta de la ultraderecha que le ofrecen los grupos fascistas y el oportunismo del actual presidente del PAN. Tampoco existen elementos suficientes para pensar que los consorcios transnacionales y los Estados Unidos la presionen en este sentido. Más bien, aquella carta y los grupos que la sostienen parecen cumplir, hasta ahora, una función importante en el juego de amenazas y chantajes que utiliza la burguesía para intimidar al gobierno, obligándolo a detener las reformas, logrando así ahogar al niño en la cuna.

Todo parece indicar, por lo tanto, que independientemente de que prosigan las escaramuzas, la burguesía y la facción conservadora del grupo gobernante van a jugar la carta de la renovación sexenal del equipo en el poder... Esta carta abre la posibilidad de negociaciones internas que, a reserva de la aparición improbable de nuevos actores en el escenario político, permitiría realizar ajustes sin rupturas bruscas en el aparato estatal que expresen la correlación real de fuerzas, o sea la integración de un equipo gubernamental donde la burguesía esté mejor representada. Puntos importantes en la negociación serán la liquidación de las viejas ilusiones cardenistas y los espejismos a que ha dado lugar la "apertura democrática", particularmente un mayor recurso a la represión para disciplinar a los sectores disidentes. De ser así este régimen pasará a la historia no por sus reformas sino por su carácter de transición.

¿Qué hay a la izquierda del reformismo estatal? Hasta ahora explosiones aisladas de descontento en el campo, las luchas por lograr la democratización sindical, los intentos de ampliar la base popular de las organizaciones políticas existentes y de formar nuevas y la experiencia de dos movimientos de gran importancia histórica: el ferrocarrilero del 59 y el estudiantil del 68. Estos movimientos dan cuenta del potencial de las nuevas fuerzas, pero al mismo tiempo muestran su débil proceso de estructuración, constituyen una advertencia, aunque todavía no son una alternativa del presente. La tarea de la izquierda es contribuir a crear esa alternativa.

¹ Libertad que se amplía o restringe en coyunturas específicas, según afecte la posición del gobierno.

² Incluso se ha estimulado la formación de un partido de izquierda donde se aglutinarían estos sectores descontentos y que representaría una alternativa al ilegal Partido Comunista. Un aspecto importante, por otro lado, es la reforma electoral que permite una mayor presencia de los partidos de oposición, particularmente en la provincia.

³ En lo que respecta a la inspiración burguesa de la apertura o el apoyo real de una fracción de la burguesía al proyecto de reformas, no puedo señalar ningún caso concreto fuera de declaraciones de circunstancia. En cambio, las reacciones concertadas, o en todo caso coincidentes de las distintas organizaciones de la burguesía frente a iniciativas estatales de importancia son innumerables. El tono varía, pero la actitud de reto puede encontrarse en todos los matices. Al respecto es importante

subrayar que la actitud más dura y desafiante se encuentra entre las burguesías regionales, particularmente de Monterrey, Guadalajara y Puebla, mientras que las posiciones más prudentes se localizan en la burguesía capitalina y del Estado de México; dentro de éstas hay un abanico de posiciones, destacando entre las más duras las de la nueva dirección de COPARMEX que mantiene ligas estrechas con la burguesía de Monterrey y la CANACO. En el otro extremo se encuentra USEM y particularmente CANACINTRA, que juega el papel de mediadora entre el gobierno y los empresarios en los momentos más agudos de conflicto.

⁴ Al expropiar el excedente de veinte hectáreas de tierras beneficiadas por obras de riego realizadas por el gobierno.

⁵ Siguiendo las viejas reglas del juego, las grandes organizaciones empresariales saludaron con un coro de elogios los proyectos de reformas que Echeverría planteó al iniciar su mandato. Sólo COPARMEX y asociaciones más pequeñas y especializadas como la Cámara de Productores de Artículos Eléctricos y la Bolsa de Valores de la Ciudad de México, manifestaron su desacuerdo con los cambios planteados en la política económica.

⁶ En el caso de Tecomán, Colima, primer lugar donde se intentó aplicar dicha ley, la burguesía rural se impuso.

⁷ Después de una actitud de tolerancia y del establecimiento de contactos con el movimiento de Vallejo y de críticas a la burocracia sindical, ante la reacción de esta última el gobierno dio marcha atrás y apoyó el statu quo: Un caso aparte, por analizar, es el del STERM, que sería un ejemplo de solución negociada, aunque hasta ahora todo hace pensar en que el movimiento pro independencia sindical del STERM fue neutralizado.

⁸ Este proceso lo hemos podido observar de cerca en el caso del Distrito de Riego 03, en el Estado de Hidalgo.

⁹ Poco conocemos de la situación interna del ejército. Existe la imagen de que al lado del grueso de la oficialidad, sin una conciencia política afinada, existen los elementos tecnocráticos profesionistas, egresados de la Escuela Superior de Guerra que son más politizados. Estos elementos tecnocráticos estarían sometidos a una doble presión ideológica. Por un lado, el reformismo y por el otro, el de la ideología de la seguridad interna. A pesar de la escasa información, la función represiva que han ejercido en la última década y más particularmente en el último sexenio contra las luchas populares, los elementos autoritarios de su formación y la creciente influencia del ejército norteamericano, no nos inclinan a pensar que predominen los elementos reformistas. Por otra parte, los programas de entrenamiento antiguerrillero se han traducido en que la inteligencia militar sea ahora un factor clave en el aparato represivo.

¹⁰ Véase Fernando H. Cardoso, *Las crisis políticas y las luchas de clases en América Latina*. Ponencia presentada en el seminario organizado por el IIS en Oaxaca, en junio de 1973. El conjunto de los trabajos será publicado próximamente por la Editorial Siglo XXI.

¹¹ La desfavorable coyuntura económica y particularmente la inflación han contribuido a debilitar el apoyo popular al gobierno.

¹² Una excepción podría ser el grupo guerrillero de Lucio Cabañas que parece tener el apoyo o al menos la complicidad de sectores campesinos de Guerrero. De todas maneras su área de influencia es restringida.